JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C. Diciembre trece de dos mil veintidós.

REF. ACCIÓN DE TUTELA No. 1100131030272022- 00505-00 de ERADIO BRAYAM GARRIDO LÓPEZ-SIERRA ALTAMIRANO contra JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL.

Procede el Despacho a decidir la presente acción de tutela con el siguiente estudio:

ANTECEDENTES :

LA ACCION Y EL DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO

El señor ERADIO BRAYAM GARRIDO LÓPEZ-SIERRA ALTAMIRANO actuando en causa propia acude, a esta judicatura, para que le sea tutelado el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD JURIDICA Y CONFIANZA LEGITIMA que considera fueron vulnerados por la parte accionada.

Como hechos de la demanda fundamenta en síntesis que: Que el día 20 de octubre 2022, el juzgado accionado resolvió NEGAR medida cautelar solicitada en data 27 de septiembre de 2022, previo dispuso notificar esta decisión por estado electrónico del día siguiente 21 de octubre de 2022, empero, EN EL LISTADO DE LOS AUTOS DETERMINADOS en el ESTADO ELECTRÓNICO No. 71, NO se halla la decisión pertinente, se le ha solicitado iteramente enviar copia de la decisión y aun no lo hace.

Señala que el día 27 de septiembre de 2022, a través de apoderada solicito al juzgado accionado, estudiar la viabilidad jurídica procesal de DECRETAR MEDIDA CAUTELAR de conformidad con el mandato de los Arts 588 y 590 Numeral 1, Literal C. del C.G.P.

Que el día 20 de octubre de 2022, el juzgado accionado, NEGÓ la petición cautelar y dispuso NOTIFICAR la decisión a través de estado electrónico el día 21 de octubre siguiente de 2022.

Dice que el día 21 de octubre de 2022, el demandante, interpuso y sustentó en un solo libelo, recurso judicial ordinario de apelación contra la decisión precedente del 20 de octubre de 2022, QUE NEGÓ solicitud de medida cautelar.

Manifiesta que a la fecha de hoy 29 de noviembre esta ampliamente superado el lapso de tiempo fijado en la ley para atender y resolver sobre SI, concede O NO el recurso judicial ordinario interpuesto, lo cual, NO ha ocurrido y ello, DESCONOCE la Supremacía Constitucional y VULNERA DERECHOS FUNDAMENTALES tales como; DEBIDO PROCESO JUDICIAL- Cumplimiento del término procesal, la seguridad jurídica, la confianza legítima y el acceso efectivo a la tutela judicial.

Solicita que a través de este mecanismo se le conceda el amparo de tutela invocado y por contera SE ORDENE AL JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C. Expediente No. 11001400303420210099200, QUE DE INMEDIATO ENVIE VIA EMAIL, copia del auto de fecha 20 DE OCTUBRE DE 2022, que resolvió petición de medida cautelar.

TRAMITE PROCESAL

Por auto de diciembre 2 de 2022, se admitió la acción de tutela requiriendo a la parte accionada para que en el término de dos días se pronunciaran sobre los hechos y circunstancias que motivaron la acción constitucional.

CONTESTACION DE LA PARTE ACCIONADA

JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL

Allego copia de los autos proferidos en fecha 7 de diciembre de este año, mediante los cuales, se concede la apelación contra el auto del 20 de octubre de 2022 en el efecto devolutivo, ordenando remitir copia del expediente Al Juzgado 35 Civil del Circuito, por cuanto ya había conocido en segunda instancia.

El segundo auto de la misma fecha 7 de diciembre de 2022 ordena corregir el auto admisorio de la demanda en lo que respecta a los numerales 4, 5 y 6, ordenando **COMUNICAR** la existencia del proceso a la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO RURAL (INCODER) hoy AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VICTIMAS** y al **INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC)** y a la **PERSONERÍA DISTRITAL**, conforme las previsiones establecidas en el parágrafo del numeral **2 del artículo 14 de la ley 1561 de 2012**. Dispuso la inscripción de la demanda en el certificado de tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria **50S-40132413**. Y con fundamento en el numeral **3 del artículo 14 de la ley 1561 de 2012** ordeno que el demandante instale una valla de

una dimensión no inferior a un metro cuadrado, en un lugar visible del predio objeto del proceso, junto a la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite.

Igualmente se allego las constancias de envío de los oficios y de las comunicaciones a los correos electrónicos. Se aporoto también el envío del link del expediente para que se surta el recurso de apelación.

CONSIDERACIONES:

De la Acción:

Respecto de la acción ejercida por el perjudicado el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia consagra que: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Competencia y Procedencia:

Es competente este Juzgado con fundamento en el Decreto 1382 de 2000.

Del caso Concreto:

Concorre a esta judicatura el señor ERADIO BRAYAN GARRIDO LOPEZ SIERRA ALTAMIRANO para solicitar SE ORDENE AL JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C. Expediente No. 11001400303420210099200, QUE DE INMEDIATO ENVIE VIA EMAIL, copia del auto de fecha 20 DE OCTUBRE DE 2022, que resolvió petición de medida cautelar.

Procedencia de la acción de tutela

Legitimación activa

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Así mismo, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 contempla la posibilidad de agenciar derechos ajenos cuando "*el titular de los mismos no está en condiciones de promover su propia defensa*". En la misma norma, se establece que la legitimación por

activa para presentar la tutela se acredita: (i) en ejercicio directo de la acción; (ii) por medio de representantes (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través de apoderado judicial; y (iv) utilizando la figura jurídica de la agencia oficiosa.

En el presente caso se encuentra acreditado el requisito de legitimación por activa toda vez que la tutela la presenta el señor ERADIO BRAYAN GARRIDO LOPEZ SIERRA ALTAMIRANO.

Legitimación por pasiva

La legitimación por pasiva en la acción de tutela se refiere a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, a efectos de que sea llamada a responder por la vulneración o amenaza de uno o más derechos fundamentales. En este caso la parte accionada es el Juzgado 34 Civil Municipal.

Inmediatez

Este requisito de procedibilidad impone la carga al demandante de presentar la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la conducta que causa la vulneración de sus derechos fundamentales, cumpliéndose en este caso dicho requisito.

Subsidiariedad

Según lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo en los casos en que sea interpuesta como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable

Teniendo en cuenta los derechos que indica el accionante como vulnerados y con respecto al Derecho del **Debido proceso**, en las actuaciones judiciales, exige que todo procedimiento previsto en la ley, se adecue a las reglas básicas derivadas del artículo 29 de la Constitución, tales como la existencia de un proceso público sin dilaciones injustificadas, con la oportunidad de refutar e impugnar las decisiones, en donde se garantice el derecho de defensa y se puedan presentar y controvertir pruebas, so pena de vulnerar los derechos fundamentales de los sujetos procesales y de alterar las reglas mínimas de convivencia social fundadas en los postulados del Estado social de derecho .

El artículo 29 de la Constitución consagra el derecho al debido proceso, que se entiende como “la oportunidad reconocida a toda

persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables". Tal derecho, siendo de aplicación general y universal "constituye un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico".

De conformidad con la disposición anterior, los artículos 229 Superior y 2º de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia consagran el derecho fundamental de toda persona a acceder a la justicia, cuyo contenido ha sido definido por la alta Corporación como *"la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes"*¹. Entonces, aquella prerrogativa de la que gozan las personas de exigir justicia, impone a las autoridades públicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio público y derecho sea real y efectivo.

La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la senda idónea para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación "con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure 'vía de hecho'", y bajo los supuestos de que el afectado concorra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que "no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo"

Teniendo en cuenta lo pedido en tutela, y los autos y comunicaciones allegadas por el Juzgado 34 Civil Municipal, el amparo solicitado debe negarse, ya que lo pretendido por el accionante se ha cumplido y como consecuencia de ello el objeto tutelar desapareció, por lo que se negara la tutela por carencia total de objeto al darse la situación de hecho superado.

Np hay vulneración a los derechos del accionante.

Asi las cosas, y al haberse superado el hecho que dio origen a la presente acción constitucional, se niega el amparo solicitado.

Por lo expuesto, el Juzgado veintisiete Civil del Circuito de Bogotá D.C., administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE :

1.- **NEGAR** por hecho superado el amparo constitucional al debido proceso, Seguridad jurídica y Confianza legítima impetrado por **ERADIO BRAYAM GARRIDO LÓPEZ-SIERRA ALTAMIRANO** contra **JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL**.

2.- Notifíquesele a las partes el presente fallo por el medio más expedito.

3.- Remítase el expediente, a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

La Juez,

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS.

Firmado Por:

Maria Eugenia Fajardo Casallas

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 027 Escritural

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2e14c3986d9c93208a770f62cd4c22004c82ce7918020a4a98cb9b6bc37ce9b0**

Documento generado en 13/12/2022 08:26:25 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>